

NUE 172-A-2018 (RC)

**Vega Cruz contra Corte Suprema de Justicia (CSJ)**

**Resolución definitiva**

**INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:** San Salvador, a las quince horas con cinco minutos del veintidós de marzo de dos mil diecinueve.

***1. Descripción del caso***

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por **Herbert Danilo Vega Cruz** en contra de la resolución emitida por la Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia (CSJ)**, el 30 de agosto de 2018, referencia: Res. UAIP/3188/RR/1069/2018(2), que declaró la inexistencia de la información relativa a: “declaración de patrimonio en copia certificada de cese de funciones del Alcalde Municipal de San Salvador Nayib Armando Bukele Ortéz, periodo 2015-2018; y el resultado de la auditoría realizada en la Sección de Probidad de la CSJ”.

Por su parte, la oficial de información de la **CSJ** resolvió: “*confirmase* al 16 de agosto de 2018, la inexistencia de la presentación de la declaración patrimonial de cese de funciones en el cargo de Alcalde Municipal de San Salvador por parte de Nayib Armando Bukele Ortiz, y en consecuencia, la auditoria respectiva”.

En ese orden, la inconformidad del apelante radica en que la oficial de información de la CSJ no establece en la resolución una fecha determinada para entregar la declaración patrimonial de cese de funciones y el resultado de la auditoria a las declaraciones de patrimonio de toma de posesión y cesación del cargo del ex Alcalde Municipal de San Salvador, período 2015-2018, señor Nayib Armando Bukele Ortiz.

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado **René Eduardo Cárcamo** para instruir el procedimiento.

En el informe justificativo de ley, la apoderada especial de la **CSJ** manifestó en lo medular, lo siguiente: a) que se cumplió con el procedimiento dispuesto en la LAIP para

tramitar la solicitud, pues la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial, admitió la petición planteada por el ciudadano y emitió el respectivo memorándum, dirigido a la unidad administrativa correspondiente, siendo esta la Sección de Probidad de la CSJ; b) que el IAIP ha sostenido en reiteradas ocasiones el criterio resolutivo de las causales que pueden dar lugar a la inexistencia, y entre ellas, “que nunca se haya generado el documento respectivo”; c) que para el presente caso se configura la causal anterior en tanto la Sección de probidad ha afirmado que no existe lo solicitado en sus registros, ya que el ex Alcalde de San Salvador aún no ha presentado su declaración de patrimonio de cese de funciones, y en consecuencia, no se ha realizado la auditoria respectiva; por tanto, ambos son inexistentes. Finalmente, solicitó que se ratifique la resolución ref. UAIP/3188/RR/106972018(2), dictada por la oficial de información de la CSJ, en la que se confirma la inexistencia de la presentación de la declaración patrimonial de cese de funciones en el cargo de Alcalde Municipal de San Salvador, por parte del Señor Nayib Armando Bukele Ortiz, y de la auditoría respectiva.

**II.** La audiencia oral se llevó a cabo en la fecha y hora señalada, con la comparecencia del apelante Herbert Danilo Vega Cruz y de la apoderada especial del ente obligado, Licenciada Eva Marcela Escobar Pérez. Durante la etapa de incidentes, no hubo planteamiento por las partes.

En la etapa de ofrecimiento de prueba, las partes no incorporaron elementos probatorios, siendo la audiencia oral el último momento procesal oportuno; por lo que el análisis de la prueba se realizará con base a la documentación presentada previamente.

Posteriormente, en la etapa de alegatos, el parte apelante expuso en lo medular: 1) que lo que plantea no es nuevo, ya que el Instituto ha dictado múltiples resoluciones relacionadas con este tema; 2) que su petición va en la línea de obtener la copia declaración de cesación del cargo del ex Alcalde de la Municipalidad de San Salvador, y la respectiva auditoria patrimonial que ya debería haber realizado la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia; 3) que el Art. 27 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (en adelante LEIFEP) dice que: “Corresponde a la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia velar por el estricto cumplimiento y aplicación de las disposiciones de esta ley”; 4) que el Art. 3 de la misma ley dice que dentro de los 60 días

siguientes a partir de la fecha de la cesación del cargo, los funcionarios deberán presentar la declaración de patrimonio; misma obligación que tienen los miembros de los Concejos Municipales de conformidad al Art. 5 ordinal 21, y el período del ex Alcalde finalizó el 31 de mayo de 2018; 5) finalmente, el Art. 17 de la misma ley establece una obligación que dice: “la corte suprema de justicia impondrá multas [...] a los funcionarios que omitieren presentar la declaración en el plazo indicado en el Art. 3 y les fije un nuevo plazo para que lo efectúe”; 6) que existe una premeditada y dolosa intención por parte de la Sección de Probidad de no hacer su trabajo, de no ser transparentes al no generar esa información; 7) que él tiene pendiente que le entreguen las auditorias de todo el gabinete del período del presidente Funes; sin embargo la sección de probidad aún no las ha entregado pese a que se comprometieron con un plan para ir entregándolas gradualmente, y es una resolución del 2017; 8) que no se trata de que la información solicitada no exista, sino que no quieren generarla; y, 9) que no están cumpliendo con su trabajo en tanto deben exigirle a los ex funcionarios las declaraciones de patrimonio de cesación del cargo, y nadie hace nada. Finalmente pide al IAIP, que ordene la entrega de la información solicitada, dé continuidad a la jurisprudencia ya emitida y le ordene a la Sección de Probidad que realice las diligencias necesarias para poder elaborar la auditoria de declaración de patrimonio del ciudadano Nayib Armando Bukele Ortiz cuando fungió como Alcalde de San Salvador.

Por su parte, la CSJ expuso en lo medular: 1) que una vez delimitado el objeto de controversia en el presente procedimiento, es preciso aclarar que no estamos ante el mismo supuesto de la resolución emitida por este Instituto en el caso 330-A-2016 acumulado –en el cual el señor Vega Cruz también es peticionario y apelante–, ya que en ese caso los funcionarios públicos respecto de quienes se había solicitado las declaraciones de patrimonio de toma y cese de funciones y las auditorias respectivas, sí habían presentado ambas declaraciones de patrimonio, y eso habilita a que la Corte ejerza sus funciones de conformidad al Art. 240 Constitución de la República (Cn). Asimismo, manifestó que es un requisito indispensable contar con ambas declaraciones de patrimonio para poder realizar las auditorias respectivas; sin ellas, la Corte no tiene parámetros para contrarrestar, o dicho de otra forma, los requisitos fundamentales; 2) que el Art. 3 de la LEIFEP establece una obligación para los funcionarios de presentar la declaración de patrimonio; luego de eso la Ley no habilita a la Sección de Probidad para exigirle al funcionario que las presente una vez

vencido el plazo, lo que si puede hacerse es iniciar un proceso para imposición de multas y otorgar un nuevo plazo para que presenten las declaraciones, por lo que la Corte tiene que atenerse al tenor expreso de la Ley; 3) que para el caso que nos ocupa, la CSJ realizó las diligencias que le correspondían para dar trámite a la solicitud de acceso, remitiendo el requerimiento a la Sección de Probidad al ser la Unidad Administrativa competente en esta materia, quienes informaron que en esa fecha el ex Alcalde de San Salvador Nayib Armando Bukele Ortiz no había presentado la declaración de cese de funciones, lo cual impide realizar la auditoría; 4) que a través del informe de defensa rendido se adjuntó un informe del Subjefe de la Sección de Probidad mediante el cual reiteraba que hasta esa fecha aún seguía sin presentar la declaración de cese de funciones, ya que no consta en los archivos de dicha Sección que haya sido presentada; y, 5) por lo que considera que atendiendo al estricto ámbito de la petición formulada por el ciudadano Vega, la CSJ ha actuado conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP); y por tanto, lo que procede es la confirmación de la inexistencia en tanto la CSJ no puede inventarse datos, y por tanto no se ha vulnerado el derecho de acceso a la información del ciudadano al habersele dado argumentos jurídicos válidos del porque no se entregó la información, puesto que aún no está en poder de la Corte. Finalmente, informó que existe un procedimiento para imposición de multas ya iniciado por parte de Corte Plena en contra del ex Alcalde de San Salvador, pero que no corresponde a lo solicitado por el ciudadano y en ese acto, solicitó copia del video de esta audiencia.

## ***2. Análisis del caso***

El análisis jurídico del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** determinación de la naturaleza de la información solicitada, **(II)** valoración de la prueba aportada por la Corte Suprema de Justicia, **(III)** la información inexistente y sus presupuestos, **(IV)** análisis del caso en torno a la inexistencia de la información alegada por el ente obligado y **(V)** consideraciones finales.

**I.** El Derecho de Acceso a la Información Pública (en adelante DAIP) es un derecho constitucional “implícito”; es decir, no regulado expresamente en la Constitución (Cn.) pero que tiene una condición indiscutible de derecho fundamental, surgida del derecho a la libertad de expresión regulado en el artículo 6 de la Cn. El DAIP comprende la facultad de buscar, recibir y difundir datos, ideas o informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan

“interés público”. Este “derecho a saber” se enmarca en el ámbito de las libertades individuales, aunque también tiene un carácter colectivo que adquiere relevancia para el fortalecimiento del estado democrático de derecho, porque su ejercicio garantiza la transparencia y permite a las personas acceder libremente a las informaciones en poder de las instituciones del Estado, como un mecanismo de control social a la gestión pública.

La Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) tiene como fines, entre otros, la promoción de la participación ciudadana en el control de la gestión gubernamental y la fiscalización ciudadana al ejercicio de la función pública; promover la eficiencia de las instituciones públicas; contribuir a la prevención y combate de la corrupción; y fomentar la cultura de transparencia (Art. 3). Además, uno de sus principios es la “rendición de cuentas”, por medio del cual quienes desempeñan responsabilidades en el Estado están obligados a rendir cuentas sobre su gestión, ante el público y la autoridad competente (Art. 4 letra h.).

En línea con lo anterior, no puede considerarse aisladamente lo establecido en el Art. 240 de la Cn.; sino que ineludiblemente, conforme al criterio sistemático, debe interpretarse conjuntamente con otras disposiciones del cuerpo normativo en el que está inserto. Por lo tanto, es necesario determinar el sentido del referido artículo en relación con el Art. 6 inciso 1° de la Cn., que reconoce la libertad de información, que consiste en el derecho a investigar o buscar y a recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público.

La libertad de información se manifiesta a través de dos derechos: el derecho a comunicar libremente la información veraz por cualquier medio de difusión; y, el derecho de acceso a la información pública, el cual implica el libre acceso, por parte de las personas, a las fuentes que contienen datos de relevancia pública, por lo que existe protección constitucional de la búsqueda y obtención de información dado que existe un principio general de publicidad y transparencia de las actuaciones del Estado .

Y es que en razón de sus funciones, los funcionarios públicos se encuentran sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad —tal como lo establece el Art. 11 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos—, y “sus actuaciones salen innegablemente del dominio privado para

insertarse en el dominio público, esto se asienta no en la calidad del sujeto, sino en el interés y relevancia pública de las actividades que realiza”. De este modo, el que ingresa al servicio público voluntariamente acepta las condiciones inherentes al mismo, tales como un grado disminuido de privacidad o intimidad respecto del que correspondería a un sujeto común.

En este orden de ideas, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los funcionarios públicos son titulares del derecho a la intimidad y por ende del derecho a la propia imagen, pero la protección a estos derechos es más débil en comparación con la que se concede a los particulares. Esto es así, porque los funcionarios públicos se encuentran expuestos permanentemente al escrutinio público sobre las actividades que realizan en el ejercicio de su función, las cuales son de interés público; y, se insertan constantemente en el debate, como mecanismo de control ciudadano frente al poder.

Por otra parte, la jurisprudencia constitucional ha manifestado que el carácter de derecho fundamental del acceso a la información propicia el afianzamiento de democracias transparentes y efectivas, facilita la rendición de cuentas y genera un debate público permanente, sólido e informado. Desde esta perspectiva, el acceso a la información prepara a las personas para asumir un papel activo en el gobierno, mediante la construcción de una opinión individual y colectiva fundada sobre los asuntos públicos, lo que les permite una participación política mejor orientada, deliberante y responsable, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. En dicho sentido, este nivel de contraloría ciudadana incentiva a los gobiernos a utilizar los recursos estatales efectivamente para el bien colectivo y reduce los espacios para la corrupción.

Es así que la transparencia, consagrada –además–, como un principio de la ética pública que rige las actuaciones de los servidores públicos (Art. 4 letra “f” de la Ley de Ética Gubernamental) según las tendencias modernas, contrasta con el mantenimiento en secreto de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, ya que obliga a la fiscalización de la actividad del servicio público y con ello a cumplir con el objetivo de prevenir o detectar actos de corrupción, especialmente casos de enriquecimiento ilícito.

Ahora bien, el DAIP no es una prerrogativa absoluta: su interacción con otros derechos de igual rango posibilita escenarios de restricciones justificadas. En este sentido, la LAIP regula las limitantes para acceder a la información pública, que en términos generales se clasifican en: la información reservada –Art. 19–; la información confidencial (en todas sus dimensiones) –Art. 24–; y la información inexistente –Art. 73–.

Por otro lado, toda restricción al DAIP debe analizarse tomando en cuenta el principio de máxima publicidad consagrado en el Art. 4 de la LAIP; es decir, que toda la información en poder de las entidades obligadas es pública, salvo que cuente con algunas de las excepciones contempladas en la misma Ley. En tal sentido, la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos ha establecido que los Estados tienen la carga de la prueba en demostrar que las limitaciones al acceso a la información son compatibles con las normas interamericanas sobre libertad de expresión<sup>1</sup>. También lo ha afirmado el Comité Jurídico Interamericano en su resolución sobre los “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, al establecer que, “la carga de la prueba para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer en el órgano al cual la información fue solicitada”<sup>2</sup>. Lo anterior, a efecto de generar seguridad jurídica en el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues al estar la información en control del Estado, debe evitarse al máximo la actuación discrecional y arbitraria del mismo, en el establecimiento de restricciones al derecho<sup>3</sup>.

En definitiva, mediante la publicidad de las declaraciones patrimoniales que presentan los funcionarios y consecuentemente con el examen que la CSJ realiza de estas, se fomenta el principio ético de la transparencia, que sirve como mecanismo de combate a la corrupción y construcción de confianza ciudadana, y es un elemento fundamental para la rendición de cuentas de nuestro sistema democrático. Desde esa perspectiva, indudablemente la naturaleza de la información es pública.

---

<sup>1</sup> Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. Párr. 93.

<sup>2</sup> Comité Jurídico Interamericano. Resolución 147 del 73º Período Ordinario de Sesiones: Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información. 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7.

<sup>3</sup> Corte IDH. *Caso Claude Reyes y otros*. *Op.cit.*

En este orden de ideas, corresponde al ente obligado demostrar de manera fehaciente la aplicación de cualquiera de las causas de restricción al derecho de acceso a la información, incluidos los supuestos de inexistencia de la información solicitada, como en el caso que nos ocupa.

**II.** Entonces, es oportuno determinar si el ente obligado ha acreditado la imposibilidad de proporcionar la información; y para ello, es preciso realizar ciertas acotaciones sobre la aportación de prueba.

Al respecto, el Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM) –de aplicación supletoria en estos procedimientos–, según lo establecido en el Art. 102 de la LAIP, contempla el **derecho de probar**; es decir, el derecho que tienen las partes de probar sus afirmaciones, a fin de que estas sean tomadas en cuenta al momento de emitir resolución sobre los hechos controvertidos que sean fundamento de la pretensión.

En su sentido procesal, la prueba es un medio de verificación de las proposiciones otorgadas por las partes, la cual a su vez se encuentra sujeta a principios y reglas que deben respetarse en cada acto a efecto de garantizar la legalidad del mismo.

Dentro de estos principios se encuentra el de pertinencia, idoneidad o conducencia y utilidad de la prueba. Este principio representa una limitación al principio de la libertad de la prueba, pero es igualmente necesario, pues significa que el tiempo y el trabajo de los funcionarios administrativos y de las partes en esta etapa del proceso, no debe perderse en la práctica o reproducción de medios que por sí mismos o por su contenido, no sirvan en absoluto para los fines propuestos y aparezcan claramente improcedentes o no idóneos.

En este contexto, el CPCM contempla, además, dos extremos que deben cumplirse para la admisión de la prueba presentada por las partes: **la pertinencia y la utilidad**. En cuanto a la pertinencia, el Art. 318 del CPCM establece que no deberá admitirse ninguna prueba que no guarde relación con el objeto del proceso; por otro lado, en lo relativo a la utilidad, el Art. 319 del mismo cuerpo normativo contempla que no deberá admitirse aquella prueba que, según las reglas y criterios razonables, no sea idónea o resulte superflua para comprobar los hechos controvertidos.



Es importante señalar que la carga de la prueba corresponde al ente obligado, por lo que la **CSJ** debió aportar todos los elementos que considerase necesarios para establecer que dicha información es inexistente.

En el presente procedimiento, la representación de la CSJ ofreció como prueba documental lo siguiente: “Certificación de memorándum con referencia 57-2019-SP, de fecha 22 de febrero de 2019, suscrito por el Subjefe de la Sección de Probidad de la **CSJ**” (folio 14), con el objetivo de probar que hasta esa fecha, el señor Nayib Armando Bukele Ortiz aún no había presentado la declaración de cese de funciones del cargo requerido; misma que se admite en este acto por ser pertinente y útil para lo que se discute en el presente procedimiento.

Por su parte, el apelante no incorporó elementos probatorios en ninguna etapa del proceso.

Con base a los elementos de prueba presentados, valorados conjuntamente, y conforme a la sana crítica, se tienen por establecidos los siguientes hechos: (i) que a la fecha de emisión del memorándum, el Subjefe de la Sección de Probidad confirmó que el señor Nayib Armando Bukele Ortiz aún no había presentado la declaración patrimonial de cese de funciones del cargo requerido; (ii) que en razón de lo anterior, dicha declaración patrimonial de cese de funciones no se encuentra en los archivos de la Sección de Probidad de la CSJ.

**III.** Para el caso en comento, el ente obligado denegó la información por ser inexistente, ya que, según el Subjefe de la Sección de Probidad, el señor Nayib Armando Bukele Ortiz no ha presentado su declaración patrimonial de cese de funciones en el cargo de Alcalde Municipal de San Salvador, período 2015-2018 y, por tanto, no se ha realizado la auditoria respectiva.

La información inexistente se constituye, básicamente, cuando esta no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa que debería poseerla –Art. 73 de la LAIP–. No obstante, tal ausencia debe ser corroborada y comprobada por la persona que ejerce las funciones de Oficial de Información, tomando las medidas pertinentes para localizar lo

solicitado; ya que la mera alegación de no localización resulta insuficiente para declarar su inexistencia.

Este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo, b) que el documento se encuentre en los archivos del ante obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción, en este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria<sup>4</sup>.

En este contexto, corresponde estudiar la primera causal de inexistencia, puesto que sería la más aplicable al caso en razón de las alegaciones hechas por la CSJ, ya que prácticamente, se está argumentando que la información no ha sido generada.

**IV.** En el tema de la inexistencia de la información, previo a declararla –sea expresa o tácitamente–, es necesario que la oficial de información realice todas las diligencias necesarias para localizar la información, tal como lo establece el Art. 73 de la LAIP cuando afirma que “el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizar en la dependencia o entidad la información solicitada y resolverá en consecuencia”.

En ese orden, del expediente administrativo bajo referencia 3188-2018(2), remitido por el ente obligado, se advierte que la oficial de información realizó las diligencias necesarias para la obtención de la información ante la Sección de Probidad de la CSJ, siendo esta última la dependencia encargada de generar y resguardar esta información. Por lo que la resolución de la oficial de información sí está apegada a derecho.

Así, tenemos que dicha dependencia sostiene que no poseen lo solicitado, en razón de que el señor Nayib Armando Bukele Ortiz no ha presentado su declaración patrimonial de cese de funciones, y en consecuencia, no han realizado la auditoria respectiva.

---

<sup>4</sup> Resolución Definitiva IAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

Al respecto, el apelante, durante la audiencia oral, citó algunos artículos de la LEIFEP, ya que considera que la Sección de Probidad no está haciendo su trabajo por no exigirle al señor Bukele Ortiz que presente su declaración patrimonial. Por su parte, la representación de la CSJ argumenta que la Sección de Probidad no tiene la facultad para exigir la presentación de las declaraciones patrimoniales a los funcionarios de alto nivel, y que es indispensable contar con ambas declaraciones patrimoniales (toma de posesión y cese de funciones) para realizar las auditorias respectivas.

Entonces, en el caso de un funcionario de alto nivel, entendido como aquellos que desempeñan un cargo de dirección y tienen la facultad de tomar decisiones en cualquiera de los órganos del Estado (Art. 2 del Reglamento de la LAIP), el deber de transparencia les exige mayor apertura y accesibilidad respecto de su gestión frente a la población, así como estándares más altos de probidad, que requiere un comportamiento “proactivo” y no sujeto a meras “recomendaciones” para facilitar la información que de ellos se requiere para hacer su escrutinio.

En lo que respecta a la CSJ, como órgano encargado del cumplimiento y aplicación de la LEIFEP, el requerimiento ciudadano de la declaración de patrimonio de los sujetos obligados, resulta útil para hacer más eficiente la labor que realiza la Sección de Probidad, no obstante el vacío de la ley que data de 1959. En tal sentido, cabe recordar que la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), ratificada por nuestro país en 1998, prevé que a los fines de promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, los Estados Partes considerarán la aplicación de medidas destinadas a fortalecer los sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley (Arts. II y III.4).

De ahí que, a falta de una legislación de probidad que se ajuste adecuadamente a las exigencias actuales de la sociedad, es necesario que la CSJ -en observancia del Art. 27 bis de la LEIFEP-, dicte los reglamentos necesarios para el mejor cumplimiento y aplicación de la ley, conforme a la Constitución e instrumentos internacionales.

V. Finalmente, de conformidad a todo lo expuesto, este Instituto considera que con la documentación aportada se ha acreditado la inexistencia de la información requerida por el señor Vega Cruz y en consecuencia, la imposibilidad del ente obligado de entregar información que aún no ha sido generada, puesto que en el expediente administrativo ref. 3188-2018(2) constan las diligencias realizadas por el ente obligado para la obtención de lo requerido por el peticionario; razón por la que es oportuno confirmar, por esta vez, la declaratoria de inexistencia de la información solicitada en la resolución de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veinte de agosto de dos mil dieciocho, emitida por la oficial de información de la CSJ.

Ahora bien, esta confirmación de inexistencia no significa que CSJ, a través de la Sección de Probidad, no tenga la obligación legal de generar la información solicitada una vez que el ex Alcalde de la Municipalidad de San Salvador, presente su declaración patrimonial de cese de funciones; lo cual implica que deben seguir los mecanismos legales pertinentes para que este la presente y oportunamente, deberán generar la información y esta deberá estar disponible, siempre en versión pública, para ser entregada ante futuros requerimientos de información, por ser información de carácter público.

### ***3. Decisión del caso***

**Por tanto**, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base a los Artículos 94, 96 letra “b” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

**a) Confirmar** la resolución emitida el 20 de agosto de 2018 por la Oficial de Información de la **Corte Suprema de Justicia**, referente al presente caso.

**b) Entregar** a la apoderada de la **Corte Suprema de Justicia**, una copia del video de la audiencia oral relacionada con el presente procedimiento, celebrada a las catorce horas del veinte de marzo de dos mil dieciocho.

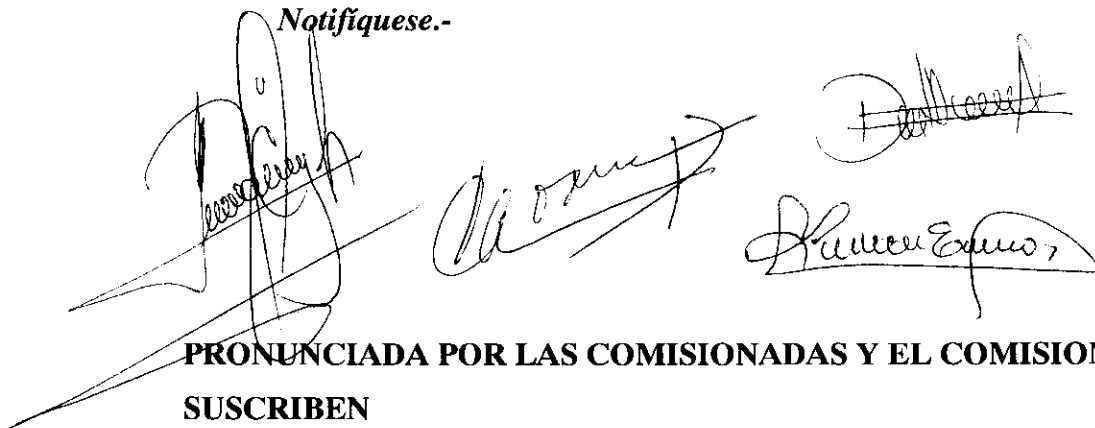
**c) Devolver** a la oficial de información de la **Corte Suprema de Justicia**, el expediente administrativo relacionado con el presente caso, una vez esta resolución adquiera estado de firmeza. Dicho expediente administrativo deberá ser retirado en las oficinas de este Instituto por dicha servidora pública o persona debidamente autorizada.

**d) Hace saber a las partes** que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

**e) Trasladar** definitivamente el presente expediente al archivo institucional una vez esta resolución adquiera estado de firmeza.

**f) Publicar** esta resolución oportunamente.

*Notifíquese.-*



**PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y EL COMISIONADO QUE LA  
SUSCRIBEN**

